

La Política Exterior “Progresista” Canadiense Premia las Violaciones a los Derechos en Honduras

Escrito por Steve Stewart, Jackie McVicar, Guillaume Charbonneau, Marie-Eve Marleau, Marie-Dominik Langlois. Traducción al español por la RSM. Versiones de este artículo aparecen en Le Devoir ([en francés](#)) y Ricochet ([en inglés](#)).

24 de enero, 2018.

En la víspera de la inauguración de Juan Orlando Hernández, 28 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil canadiense critican a su gobierno por reconocer al régimen de facto en Honduras

El 27 de enero, Juan Orlando Hernández jurará por un segundo período como presidente de Honduras, terminando con un proceso electoral turbulento marcado por acusaciones de fraude y por severa violencia contra manifestantes pro democracia. La validación de Canadá de estos resultados tan cuestionables es profundamente preocupante y representa un retroceso en la causa por la democracia y los derechos humanos en la región.

A la mañana siguiente de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre en Honduras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó resultados preliminares. Con cerca del 60 por ciento de votos escrutados, el candidato de la alianza opositora, Salvador Nasralla, se imponía por un margen del cinco por ciento al presidente Hernández del partido Nacional, de extrema derecha. Después, el TSE mantuvo un silencio total por 36 horas con lo que muchos hondureños comenzaron a temer que la elección estaba siendo robada. El gobierno de Hernández impuso un toque de queda desde la tarde hasta el amanecer y ordenó a la policía y el ejército reprimir las manifestaciones anti fraude que ocurrían en todo el país. Cuando el Tribunal finalmente reasumió la información, el liderazgo de Nasralla se había esfumado dando a Hernández una pequeña ventaja.

En las tres semanas siguientes, hasta el 17 de diciembre, cuando el TSE proclamó la victoria de Hernández, más de treinta manifestantes pro democracia habían sido muertos en las calles, docenas heridos y 800 detenidos arbitrariamente. Las organizaciones de derechos humanos de Honduras expresaron su alarma por la reactivación de escuadrones de la muerte, desapariciones forzadas y tortura de manifestantes, que fueron detenidos y acusados de “terrorismo” por participar en manifestaciones no violentas.

Dadas las irregularidades que encontró durante su Misión de Observación Electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió nuevas elecciones. Sin embargo, el gobierno canadiense, ignorando tanto la violencia y los informes de observadores internacionales, siguió a los EE.UU. expresando el apoyo de Canadá a Juan Orlando Hernández en un “tuit” enviado unos días antes de Navidad.

Desde el golpe de estado de 2009, Honduras se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, con altas tasas de asesinatos, inseguridad e impunidad. Las elecciones realizadas después del golpe de 2009 – todas ganadas por el Partido Nacional – fueron también avaladas por el gobierno canadiense del momento, a pesar de extendidas acusaciones de observadores

hondureños e internacionales de violencia e irregularidades en los procesos electorales.

El gobierno conservador de Harper se aprovechó de la ruptura democrática y el deterioro de las condiciones en Honduras para promover intereses económicos, por ejemplo, facilitando una nueva redacción del código minero de Honduras en beneficio de transnacionales mineras canadienses, y convirtiéndose en el primer país en firmar un tratado de libre comercio con el régimen post golpe hondureño.

Al aproximarse el momento de la toma de posesión de Hernández, continúa la violencia contra los activistas por la democracia. Una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil demanda el fin de la represión, un diálogo que incluya una amplia representación, y la remoción del presidente de facto. Por encima y más allá de la política partidaria, una mayoría de la población hondureña está indignada por el burdo robo de la elección del que fueron testigos que consolida aún más una mayor inestabilidad para los próximos años.

Al reconocer a Hernández como presidente de Honduras, el gobierno Liberal canadiense premia las violaciones a los derechos humanos y pone los intereses de un puñado de corporaciones transnacionales canadienses por encima de los derechos de la población hondureña y la estabilidad de la región.

Las organizaciones adherentes a este artículo trabajan en solidaridad con las organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos hondureños:

Alianza de Servicio Público de Canadá (PSAC) | Anakbayan Toronto | Asociación Quebequense de Organizaciones de Cooperación Internacional (AQOCI) | Centro de Asuntos Filipinas | Centro Justicia y Fé | CoDesarrollo Canadá | Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) | Desarrollo y Paz - Caritas Canada | Federación de Trabajadores del Quebec (FTQ) | Grupo de Orientación Política para las Américas (GOPA) | Grupo Solidaridad y Justicia (CND) | Grupo de Solidaridad con Las Filipinas -Toronto | Grupo de Trabajo sobre la Minería, Congragación de las Provincias Marítimas, Iglesia Unida de Canadá | Iglesia Unida de Canadá | Inter Pares | Las Hermanas Auxiliadoras del Quebec | Mar y Mundo | Migrante Ontario | MiningWatch Canadá | Mujeres de Raíces Diversas | Proyecto Acompañamiento Quebec-Guatemala | Red de Solidaridad de la Región Atlántica (ARSN) | Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) | Sindicato de Empleados Públicos de Canadá (CUPE) | Sindicato de Metalúrgicos (USW) | Unidos por la Justicia en la Minería | USC Canada